TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
TESLP/RR/20/2015.

RECURRENTE. Licenciado Alejandro Colunga Luna en su carácter de representante legal del Partido Acción Nacional.

AUTORIDAD RESPONSABLE.
Comisiones Distritales Electorales locales III, X y XIV del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

TERCERO INTERESADO. En el presente asunto, comparecieron en su carácter de Terceros Interesados: Los candidatos Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara y Oscar Bautista Villegas; así como el Licenciado José Guadalupe Durón Santillán, en su carácter de representante de la Alianza Partidaria.

MAGISTRADO PONENTE. Licenciado Oskar Kalixto Sánchez.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA.
Licenciada María Concepción Castro Martínez.

San Luis Potosí, S. L. P., a 13 trece de abril de 2015 dos mil quince.

V I S T O, para resolver el Recurso de Revisión TESLP/RR/20/2015, promovido por el recurrente al rubro citado, en contra de: "A).- *Se impugna el Dictamen emitido por la Comisión Distrital Electoral del Distrito III de San Luis Potosí, mediante el cual aprueba el registro*

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

de la ciudadana ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS, como candidata a diputada local por la Alianza Partidaria constituida por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en el Distrito III de San Luis Potosí, así como todas sus consecuencias legales y fácticas.

B).- Se impugna el Dictamen emitido por la Comisión Distrital Electoral del Distrito X de San Luis Potosí, mediante el cual aprueba el registro del ciudadano, OSCAR BAUTISTA VILLEGAS como candidato a diputado local por la Alianza Partidaria constituida por el Partido Revolucionario Institucional, el partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, en el Distrito X de San Luis Potosí, así como todas sus consecuencias legales y fácticas.

C).- Se impugna el Dictamen emitido por la Comisión Distrital Electoral del Distrito XIV de San Luis Potosí, mediante el cual aprueba el registro de la ciudadana MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA como candidata a diputada local por la Alianza Partidaria constituida por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en el Distrito XIV de San Luis Potosí, así como todas sus consecuencias legales y fácticas.”

G L O S A R I O

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPESLP. Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Ley Electoral vigente en el Estado. Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 2014.

Ley de Justicia Electoral. Ley de Justicia Electoral de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 30 de junio de 2014.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

CEEPAC. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

PAN. Partido Acción Nacional.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Derivado de las elecciones constitucionales 2011-2012, el 01 de julio del año 2012, fueron electos diputados federales por San Luis Potosí, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Oscar Bautista Villegas y María Rebeca Terán Guevara, por el partido Revolucionario Institucional.

b) El día 23 de mayo de 2014 fueron publicadas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. En cumplimiento al mandato contenido en el transitorio tercero de la Ley General de Partidos Políticos, el 29 de junio de 2014 el Congreso del Estado, hizo modificaciones a la Constitución Política del Estado, particularmente en los artículos 47 y 118, que establecen las restricciones de los servidores públicos de los diferentes poderes para acceder a cargos de elección popular.

c) Posteriormente, en fecha 21 de marzo de 2015, la Alianza Partidaria formada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, registró a Esther Angélica Martínez Cárdenas y a María Rebeca Terán Guevara, para candidatas a diputadas locales por el principio de mayoría relativa, por el III y XIV distrito respectivamente, para el periodo constitucional 2015-2018.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

d) En la misma fecha, la Alianza Partidaria formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, registró a Oscar Bautista Villegas, para candidato a Diputado local de mayoría relativa por el X distrito, para el periodo constitucional 2015-2018.

e) El 27 de marzo de 2015, las Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV, aprobaron respectivamente los registros de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa de Esther Angélica Martínez Cárdenas y de María Rebeca Terán Guevara.

II. Recurso de Revisión. En desacuerdo con la aprobación de los anteriores registros, el Licenciado Alejandro Colunga Luna, promovió Recurso de Revisión el día 31 de marzo de 2015.

III. Remisión del Recurso de Revisión. Con fecha 06 de abril de 2015, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante oficio CEEPC/SE/910/2015 remitió a este Tribunal Electoral el Recurso de Revisión promovido por el Licenciado Alejandro Colunga Luna; asimismo, rindió informe circunstanciado y remitió la documentación concerniente al medio de impugnación interpuesto, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral del Estado.

IV. Admisión y cierre de instrucción del Recurso de Revisión. Con fecha 09 de abril del presente año, dentro del término legal que previene el numeral 35 de la Ley de Justicia Electoral, este Tribunal Electoral admitió el Recurso de Revisión asignándole el número de expediente TESLP/RR/20/2015, y al no existir diligencia alguna pendiente de desahogo, cerró la instrucción y lo turnó al

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Magistrado relator para la elaboración del proyecto de resolución, como lo establece el artículo 53 de la citada Ley de Justicia Electoral.

V.Sentencia emitida. Circulado a los Magistrados integrantes de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución, con fecha 12 doce de abril de 2015, se citó formalmente a las partes para la sesión pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, a celebrarse a las 09:00 nueve horas del día 13 trece de abril de 2015, para el dictado de la sentencia respectiva.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 105, 106 punto 3 y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el Decreto 607 emitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, publicado el veintiséis de junio de dos mil catorce. Asimismo, son aplicables los artículos 30 tercer párrafo, 32 y 33 de la Constitución Política de San Luis Potosí; y los numerales 26, 27 fracción II, 28 fracción II, 30, 66 fracción II, 67 fracción II, 68 y 69 de la Ley de Justicia Electoral del Estado; preceptos normativos anteriores, de los que se desprende que este Tribunal Electoral es competente en esta Entidad Federativa para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales; asimismo, para garantizar la protección de los derechos político-electorales, resolviendo este Órgano Electoral en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas y de los ciudadanos, garantizando asimismo que los actos y resoluciones que se emitan en materia electoral, se ajusten invariablemente a los principios que rigen la función de la misma materia y de conformidad con la legislación aplicable.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, causales de improcedencia y sobreseimiento; presupuestos procesales y requisitos de procedibilidad.

El medio de impugnación que se analiza satisface los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 66 a 70 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, como se puntualiza en seguida:

a) Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Pleno del Tribunal Electoral considera que no existe causal de improcedencia, ni de sobreseimiento de las que establecen respectivamente los artículos 36 y 37 de la Ley de Justicia Electoral del Estado.

b) Definitividad. En el caso se cumple dicho requisito, toda vez que lo que se impugna es el dictamen emitido por las Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV, que respectivamente otorgaron el registro para diputados locales por el principio de mayoría relativa de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de Oscar Bautista Villegas y de María Rebeca Terán, que no requiere que se haya agotado diversa instancia prevista, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 fracción II de la Ley de Justicia Electoral.

c) Oportunidad. El medio de impugnación fue promovido oportunamente, toda vez que el recurrente tuvo conocimiento del acto que reclama el 27 de marzo del año en curso, e interpuso el recurso de revisión que nos ocupa el 31 de marzo siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley de Justicia Electoral vigente en el Estado.

d) Legitimación. La parte actora se encuentra legitimada para presentar el medio de impugnación que nos ocupa, como así lo dispone el numeral 67 fracción I de la Ley de Justicia Electoral, en

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

razón de que el Consejo Estatal Electoral en el informe circunstanciado que emitió a este Tribunal Electoral reconoce la legitimidad con la que actúa.

e) Interés jurídico. En el presente asunto, se demuestra el interés jurídico del Licenciado Alejandro Colunga Luna en su carácter de representante legal del Partido Acción Nacional, como así lo señalan los artículos 34 fracción I y 66 fracción II de la Ley de Justicia Electoral del Estado, en razón de que sus pretensiones son contrarias a las que establecen las Comisiones Distritales III, X y XIV.

g) Personería. El Licenciado Alejandro Colunga Luna, cuenta con personería en el presente recurso, así lo reconoce el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el informe circunstanciado CEEPC/SE/910/2015 que emitió con fecha 06 seis de abril del presente año.

h) Tercero Interesado. El día 06 de abril de 2015 dos mil quince, mediante oficio CEEPC/SE/910/2015, la Autoridad Administrativa Electoral presentó su informe circunstanciado, mediante el que informó entre otras cosas, que durante el término legal previsto por la Ley Electoral, al presente recurso comparecieron Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara y Oscar Bautista Villegas, con el carácter de terceros interesados; asimismo, compareció el Licenciado José Guadalupe Durón Santillán, en su carácter de representante de la Alianza Partidaria formada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, mismos, que mediante escrito respectivo, formularon alegatos que en su derecho procede.

TERCERO. Agravios expuestos por la parte actora.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Los agravios expuestos por el Licenciado Alejandro Colunga Luna, en el medio de impugnación que nos ocupa fueron los siguientes:

“ÚNICO.- Genera lesión jurídica a los derechos del partido político que represento, así como de los candidatos a diputados locales postulados por Acción Nacional en los Distritos Locales III, X, y XIV, el hecho de que las Comisiones Distritales Electorales dependientes del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana hayan aprobado el registro como candidatos a diputados locales de los ciudadanos sin percibir que, los mencionados ejercieron como Diputados Federales en la actual legislatura sin pedir licencia con una anticipación a 90 días previos a la elección que se realizará el 7 de junio de 2015.

Ciertamente, el hecho de que los funcionarios públicos mencionados hayan seguido en sus encargos como diputados federales, viola el principio de igualdad contenido en el artículo primero del Pacto Federal, en relación directa con los numerales 23.1 y 24 de la Convención Interamericana de los Derechos humanos, (sic) que prevé que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección, ello en virtud de que dicho encargo les significa ventajas contra los candidatos que no figuran como servidores públicos noventa días antes de la elección, desempeño en la legislatura federal que se acredita con los siguientes elementos, que se ofrecen desde este momento como prueba relacionándolos con los hechos conducentes.

{...}

En efecto, con la información publicada en la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se puede acreditar que los ciudadanos ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS, OSCAR BAUTISTA VILLEGAS Y MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA siguieron desempeñando su cargo de Diputados Federales sin separarse 90 días antes de la elección a celebrarse el 7 de junio de 2015, y consecuencia de ello no debió de aprobárseles su registro como candidatos a diputados locales por los distritos III, X y XIV del estado de San Luis Potosí, pues están en un plano de ventaja contra los demás candidatos a diputados locales violando con ello los principios constitucionales y convencionales de igualdad y equidad en la contienda.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Bajo ese contexto, se evidencia que no es constitucional, convencional y legalmente válido que la restricción impuesta a los funcionarios y empleados de los poderes públicos estatales y municipales contenidos en el artículo 47 de la Constitución <política del Estado de San Luis Potosí, no alcance a los diputados y empleados de la federación, pues como se ha establecido, los mismos fungen con nombramientos otorgados por los ciudadanos, a través del sufragio libre y efectivo, y no existe razón válida y suficiente para tratarlos con un régimen de excepción, por lo tanto se solicita la inaplicación del mencionado artículo para que sean considerados en los impedimentos del mismo a los funcionarios públicos de la federación, incluidos los diputados federales.

Aunado a lo anterior, se precisa que los citados diputados federales ejercen actos de autoridad y de mando, teniendo incluso dentro de sus funciones la administración de recursos públicos, mismos que podrían ser utilizados en beneficios particulares de los referidos servidores y en detrimento de los principios de igualdad y equidad de los ciudadanos y además servidores públicos obligados a pedir licencia con 90 de anticipación a celebrarse la elección.

Por tanto, la reforma al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio de 2014, transgrede el principio de igualdad tutelado por la Carta Magna, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues con tal reforma no se garantiza la equidad en los procesos de selección de representantes de elección popular.

Usando la analogía como método integrador del derecho, se desprende que las Constituciones de otros Estados -por citar algunos- incluyen la obligación de licencia con determinado tiempo a celebrarse la elección a diputados federales y funcionarios de la federación como requisito para ser Diputados Locales:

{...}

En ese orden de ideas, los registros de los candidatos a diputados locales aprobados por las comisiones distritales electorales de los Distritos locales III, X y XIV, carecen de una adecuada motivación y fundamentación, ello es así ya que las responsables no valoraron que los ciudadanos ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS, OSCAR BAUTISTA VILLEGAS Y MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA siguieron

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

desempeñando su cargo de Diputados Federales sin separarse 90 días antes de la elección a celebrarse el 7 de junio de 2015, por tanto ejercieron como funcionarios públicos y no cumplieron con las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes para garantizar la igualdad en la contienda, con respecto a los demás candidatos, ya que, con el desempeño mencionado actualizaron las siguientes conductas:

- A) Continuaron percibiendo sus emolumentos, circunstancia que significaría un desequilibrio económico respecto de otros servidores públicos que sí están obligados a separarse de su encargo y, en general, respecto de cualquier otro ciudadano que al no estar ubicado en la posición del legislador, carecería de una fuente fija de recurso económico público equiparable a la dieta legislativa.*
- B) Tuvieron una proyección de mayor incidencia, al aprovechar la imagen institucional del Congreso de la Unión, provocando con ello una relevancia e incidencia social.*
- C) Conservaron su influencia política y social, al seguir votando en comisiones y en pleno temas de interés general y que redundan en beneficios al gobernador.*
- D) Tuvieron acceso a información privilegiada, que no se encuentra al alcance inmediato de cualquier ciudadano o funcionario en licencia.*
- E) Serían inviolables por las opiniones que manifestaran en el desempeño de su encargo, y no podrían ser reconvenidos ni procesados por ellas, en términos del artículo 41 de la Constitución de San Luis Potosí.*
- F) Continuaron en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que inciden de manera directa en la configuración social de su Estado, al votar iniciativas de ley que influyen en la vida de los ciudadanos.*

Todo ello, a menos de 90 días de celebrarse la elección a diputados locales en la que se encuentran inscritos; ello indudablemente los coloca en una situación de ventaja contra el resto de los candidatos y con ello se violan los principios de certeza e igualdad, por lo que deberá revocarse los registros impugnados al actualizarse una

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015**

*circunstancia de inegibilidad con respecto de los ciudadanos ESTHER
ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS, OSCAR BAUTISTA VILLEGAS Y
MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA.*

CUARTO. Fijación de la Litis.

Este Tribunal Electoral procede a efectuar el estudio jurídico de los agravios externados por la parte disidente, circunscribiéndose en su examen a los puntos sobre los que en éste suscite la controversia expresa, en relación con las razones expuestas por la autoridad responsable y con las pruebas aportadas en el sumario.

En ese tenor, la relación de la Litis planteada se constriñe en que:

1. Que “los ciudadanos ESTHER ANGÉLICA MARTÍNEZ CÁRDENAS, OSCAR BAUTISTA VILLEGAS Y MARÍA REBECA TERÁN GUEVARA siguieron desempeñando su cargo de Diputados Federales sin separarse 90 días antes de la elección a celebrarse el 7 de junio de 2015, y consecuencia de ello no debió de aprobárseles su registro como candidatos a diputados locales por los distritos III, X y XIV del estado de San Luis Potosí, pues están en un plano de ventaja contra los demás candidatos a diputados locales violando con ello los principios constitucionales y convencionales de igualdad y equidad en la contienda”.
2. Que los citados Diputados Federales “tienen incluso dentro de sus funciones la administración de recursos públicos, mismos que podrían ser utilizados en beneficios particulares de los referidos servidores”.
3. Que “la reforma al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio de 2014, transgrede el principio de

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

igualdad tutelado por la Carta Magna, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues con tal reforma no se garantiza la equidad en los procesos de selección de representantes de elección popular”.

4. Que “las Constituciones de otros Estados -por citar algunos- incluyen la obligación de licencia con determinado tiempo a celebrarse la elección a diputados federales y funcionarios de la federación como requisito para ser Diputados Locales”.
5. Que los Citados Diputados Federales al ser registrados como candidatos a diputados locales “No cumplieron con las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes para garantizar la igualdad en la contienda, con respecto a los demás candidatos, ya que, con el desempeño mencionado actualizaron las siguientes conductas”:
 - A) “Continuaron percibiendo sus emolumentos, circunstancia que significaría un desequilibrio económico” respecto los demás competidores que carecen “de una fuente fija de recurso económico público equiparable a la dieta legislativa”.
 - B) “Tuvieron una proyección de mayor incidencia, al aprovechar la imagen institucional del Congreso de la Unión, provocando con ello una relevancia e incidencia social”.
 - C) “Conservaron su influencia política y social, al seguir votando en comisiones y en pleno temas de interés general y que redundan en beneficios al gobernador”.
 - D) “Tuvieron acceso a información privilegiada, que no se encuentra al alcance inmediato de cualquier ciudadano o funcionario en licencia”.
 - E) “Serían inviolables por las opiniones que manifestaran en el desempeño de su encargo, y no podrían ser reconvenidos ni procesados por ellas, en términos del artículo 41 de la Constitución de San Luis Potosí”.

F) “Continuaron en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que inciden de manera directa en la configuración social de su Estado, al votar iniciativas de ley que influyen en la vida de los ciudadanos”.

QUINTO. Calificación de agravios.

Del resumen general de los agravios anteriormente enunciados como **1, 2, 3, 4 y 5** en la fijación de la Litis, resultan infundados para las pretensiones del partido político actor, de conformidad a las consideraciones y fundamentos legales que en adelante se precisan.

SEXTO. Metodología de agravios.

De inicio, cabe señalar que el estudio de las inconformidades planteadas por el actor y enumeradas por este órgano revisor como **1, 2, 3, 4 y 5**, serán estudiadas de forma conjunta por la estrecha vinculación que existe entre ellas, y en el caso se justifica porque se refieren a la afectación que le causa al partido promovente que las Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV aprobaran el registro a diputados locales por el principio de mayoría relativa de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de María Rebeca Terán Guevara y de Oscar Bautista Villegas, quienes fungen como Diputados Federales y no solicitaron licencia con anticipación a 90 días previos a la elección del 07 de junio de 2015; lo que contraviene los principios de equidad, igualdad y de certeza de los demás candidatos al cargo de diputados locales.

No siendo óbice, por otra parte, precisar que el estudio de agravios en conjunto no causa perjuicio alguno al promovente, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que lo sustancial radica en que se estudien todos, sin que ninguno quede libre de examen.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio de la Décima Época. Primera Sala. Fuente Semanario Judicial de la Federación. Publicación 17 de octubre de 2014. Materia Constitucional, con el Rubro:

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ANÁLISIS CONJUNTO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).”

SÉPTIMO. Pretensión y causa de pedir.

La intención total del actor es la inelegibilidad de los candidatos propuestos al cargo de diputados locales por el principio de mayoría relativa, sobre la base de que debieron separarse del cargo de diputado federal que ostentan, lo anterior, a efecto de salvaguardar la equidad en la contienda, en base a los principios constitucionales, legales, tratados internacionales y demás principios que rigen la materia electoral.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Como se precisó, son objeto de estudio las manifestaciones de inconformidad **1, 2, 3, 4 y 5**, mismas que resultan infundadas, de conformidad a las siguientes consideraciones:

De inicio resulta prudente establecer, que la norma legal que prevé en forma directa los requisitos de elegibilidad que deben reunir los candidatos a diputados locales en el Estado, es la Constitución Política de San Luis Potosí, misma que contiene preceptos claros que no dejan duda, sobre la enunciación que hacen respecto de la forma y requisitos que deben de contemplar los ciudadanos que pretendan contender para un cargo de diputado local en San Luis Potosí, como en el caso acontece, pues para ese efecto la Constitución del Estado, sigue la línea de la Constitución Federal, al establecer la primera de

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

las citadas en el artículo 26 fracción II las prerrogativas del ciudadano, donde se establece a la letra lo siguiente:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Artículo 26

“II. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para ocupar cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que esta Constitución y las leyes establezcan;”

De lo anterior, se desprende que cualquier ciudadano (inclusive un Diputado Federal), pueda acceder a un cargo de elección popular, siempre y cuando, cumpla con los requisitos solicitados por ley de la materia.

Derivado del contexto anterior, de igual forma se obtiene que la Constitucional local vigente, en su artículo 46 señala:

“ARTÍCULO 46. Para ser Diputado se requiere:

I.- Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

II. Tener la calidad de potosino por nacimiento con residencia efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos anteriores al día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de tres años, a partir de la adquisición de la calidad de vecino;

III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión; y

IV.- Tener como mínimo veintiún años de edad al día de la elección.”

De lo trasunto, se desprende que los requisitos de elegibilidad contemplados dentro de la Constitución del Estado, no señalan expresamente que aquel diputado federal que pretenda ser votado

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

para otro cargo de elección popular en el Estado Potosino, tenga que separarse de su encargo con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral.

Ahora bien, la misma Constitución de San Luis Potosí, dentro del artículo 47 manifiesta lo siguiente:

“ARTÍCULO 47.- No pueden ser Diputados:

I. El Gobernador del Estado;

II. Los secretarios, subsecretarios o Procurador General del Estado, ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta Constitución otorga autonomía;

III. Los funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos;

IV. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan mando y atribuciones en la policía del distrito en donde se celebre la elección;

V. Los ministros de culto religioso.

VI. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; el Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección, y

VII. Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la Entidad de sus respectivas jurisdicciones.

Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, y VII de este artículo, estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.”

De la literalidad de la norma constitucional, se desprende que no existe la figura de diputado federal señalada como una restricción para acceder al cargo de diputado local en la Entidad, y mucho menos se tiene que el diputado federal tenga la salvedad que para acceder a un cargo de elección popular en el Estado, sea imperativo que se

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

separe de su encargo con 90 días de anticipación al día de la elección.

Lo expuesto pone de relieve, que lejos de admitirse la aplicación extensiva de la norma, como lo pretende el partido recurrente, en el caso concreto, el legislador claramente no encuadra la exigencia vinculada con la solicitud de licencia de los diputados federales, sin que hasta la norma vigente se haya retomado tal requisito de elegibilidad.

Respecto a lo anterior, cabe precisar que ha sido sostenido por el más alto Tribunal de Justicia Electoral en nuestro país en diversas resoluciones emitidas¹, el criterio de que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es de base constitucional y configuración legal, esto debido a que tanto en la Carta Magna Federal, como en las leyes de la materia se establecen las calidades, circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su ejercicio por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, esa libertad de configuración legislativa no puede tener un alcance tal que el legislador establezca calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que se traduzcan en indebidas restricciones al derecho de voto pasivo o algún otro derecho de igual jerarquía o bien constitucional.

En esas condiciones, es el legislador secundario el que ha de determinar las modalidades para el ejercicio de este derecho, pero esa facultad no puede desplegarse de manera arbitraria, sino que deben ser razonables y proporcionales con el fin perseguido, esto es, que no impidan o hagan nugatorio el ejercicio del derecho a preservar, en éste caso a ser votado.

En efecto, las calidades que se establezcan en la ley, deben respetar el contenido esencial del derecho referido y estar

¹ Una de las últimas, la resolución emitida en el Expediente SUP-JDC-534/2015.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

razonablemente armonizadas con el respeto de otros principios, fines o valores constitucionales.

De modo que en su regulación no debe dejar de observar los principios o bases previstos en la Constitución Federal y evitar que se contravengan las disposiciones de dicha Norma Fundamental, de las leyes que expida el Congreso de la Unión que de ella emanen y de los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución Federal.

En ese mismo sentido, los artículos 25, incisos b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, incisos b) y c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevén que todos los ciudadanos de los Estados que son parte del pacto, gozan de derechos y oportunidades de carácter político, específicamente para ser votados o elegidos y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, y que el derecho político a ser votado no posee un carácter absoluto, incondicionado o irrestricto, en tanto que existe la posibilidad de que su ejercicio se norme a través de la Constitución Federal o de la Constitución local respectiva, o que se reglamente en una ley o que se establezcan restricciones permitidas o debidas, siempre y cuando sean conformes con razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas o sean necesarias para permitir la realización de los derechos de los demás, garantizar la seguridad de todos o que deriven de las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.

Una vez que se ha establecido el parámetro de tratados internacionales que privilegian el derecho del Ciudadano a ser votado; resulta conveniente analizar, los preceptos de la Carta Magna Federal que guardan relación jurídica con dicho bien tutelado:

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

[...]

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. [...]; Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I.

[...];

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y [...]

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. [...];

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

[...];

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección.

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Artículo 59. Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulados, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.”

En ese sentido, si el núcleo esencial de los razonamientos en los que descansa la impugnación del accionante, radica en que Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara y Oscar Bautista Villegas al desempeñarse como diputados federales debieron separarse de su cargo para poder registrarse como candidatos a diputados locales con la finalidad de preservar los principios de equidad e imparcialidad, sin embargo, lo anterior no aplica obligatoriamente en el presente caso porque de las disposiciones constitucionales que preceden, es decir tanto la Constitución del Estado como la Carta Magna Federal, se obtiene que establecen una serie de restricciones al derecho a ser votado, sin que en ellas se contemple alguna de separarse de su cargo como diputado federal

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

para registrarse como candidato para contender a una diputación local, de ahí es que esas normas constitucionales que establecen requisitos de elegibilidad en sentido negativo son limitativas y no enunciativas, es decir, su construcción es cerrada y no dan lugar a la inclusión de supuestos diferentes a los expresamente establecidos en la norma.

En ese haber, el no incluirse en esas normas la figura del diputado federal, dicha limitación al derecho a ser votado no puede hacerse extensiva a cargos diferentes a los especificados, en atención a que, la interpretación de los derechos fundamentales debe hacerse de manera que permita su mayor amplitud posible y, por tanto, las excepciones establecidas han de entenderse en forma restrictiva, no incluyendo cargos distintos, aunque puedan tener similitud o sean equiparables, sino que su aplicación sólo debe constreñirse, de manera estricta, a los supuestos que fueron previstos por el legislador ; por ende, no deben darse a las hipótesis restrictivas un alcance tal, que implique el uso de la analogía o la mayoría de razón, con el objeto de considerar como requisito negativo de elegibilidad un supuesto que no se encuentre contemplado enunciativamente por la norma prohibitiva.

Al caso, resultan aplicables analógicamente las Tesis Jurisprudenciales CXXXVI/2002 y XIII/2000, aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro:

“SERVIDOR PÚBLICO. EL CONCEPTO CONTENIDO EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES PARA DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR LA INELEGIBILIDAD”.

"INELEGIBILIDAD. EL INTEGRAR UN COMISARIADO EJIDAL NO ES CAUSA DE”.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Por tanto, atendiendo al principio *pro homine* que es incorporado en múltiples tratados internacionales, cuyo criterio hermenéutico coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio; por ende, en el presente asunto este Tribunal Electoral no puede hacer un requisito negativo de elegibilidad en perjuicio de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de María Rebeca Terán Guevara y de Oscar Bautista Villegas, bajo un supuesto que no se encuentra contemplado enunciativamente por la norma prohibitiva.

Deviene ilustrativo al anterior criterio, la tesis I.4o.A.441 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro:

“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.”

En ese sentido, el requisito que el actor pretende se exija a Esther Angélica Martínez Cárdenas, a María Rebeca Terán Guevara y a Oscar Bautista Villegas, quienes desempeñan el cargo de diputados federales para registrarse como candidato a diputado local respectivamente, implicaría una restricción al derecho político electoral de ser votado bajo un parámetro (restricción) que no se encuentra prevista en la Constitución Federal.

Efectivamente, no se puede restringir ese derecho político porque ello implicaría una construcción oficiosa de obstáculos, para aquellos ciudadanos que pretendan contender en un proceso de selección de esa naturaleza, bajo un parámetro que no encuentra sustento en el contexto constitucional federal ni local; y tampoco puede exigírseles que se separen del cargo que desempeñan, aplicando los principios generales del derecho o porque se afirme que

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

es finalidad salvaguardar el principio de equidad o igualdad en la contienda electoral.

Lo anterior en virtud de que si bien es cierto que el parámetro ideal de competencia en los procesos democráticos es acercarse cada día más a una igualdad de condiciones en la contienda entre los participantes, tal situación no puede dejar de reconocer y aceptar que de manera particular cada candidato tiene una proyección como persona, unas actividades, una trayectoria y una condición socio-económica, por ello las recientes reformas electorales, cada vez buscan acercar esa igualdad de condiciones, pero sobre todo aplicadas en la contienda electoral; por ello es que la reciente reforma planteó una serie de reformas a la materia de fiscalización de los partidos políticos, candidatos y precandidatos a puestos de elección popular, para que todos gocen de las mismas oportunidades en la contienda democrática. Luego entonces de conformidad a tal reforma de fiscalización, tanto los candidatos como los partidos políticos, no pueden gastar más recursos en sus campañas y precampañas, de lo que les está legalmente autorizado. Ahí es donde el derecho electoral y los parámetros de justicia político-electoral entran a regular un factor de equidad entre los participantes.

Sin embargo contrariamente a lo anterior, no puede pedirse o incluso impedirse a los participantes en proceso democrático que no cuenten con un determinado perfil de trayectoria profesional, laboral o social; ni tampoco que derivado de esa actividad profesional o laboral cuenten con recursos económicos propios para su subsistencia personal.

En el caso particular, el recurrente establece como uno de sus agravios en su medio de impugnación que los citados diputados federales a los que solicita se les declare inelegibles *“tienen incluso dentro de sus funciones la administración de recursos públicos, mismos que **podrían** ser utilizados en beneficios particulares de los*

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

referidos servidores”. Sin embargo, respecto a los recursos públicos a que hace alusión el promovente y que tienen a su alcance los citados diputados federales, cabe señalar que el mismo promovente menciona la palabra que dichos recursos **podrían** ser utilizados, derivándose de dicha acepción el hecho de que hasta el momento esa situación no está concretada en el mundo real y fáctico como acontecida, sino que su existencia podría concretarse o no.

Lo anterior, resulta sumamente relevante para este Tribunal Electoral, en virtud de que, resulta inminente la imposibilidad lógica y jurídica de esta autoridad Jurisdiccional para pronunciarse sobre hechos futuros o de realización incierta; es decir que aún no ocurren pero podrían ocurrir.

En ese sentido contrariamente a lo estimado por el promovente, a fin de demostrar el bien jurídico de equidad supuestamente vulnerado, se hace necesario, que el actor exponga con objetividad y precisión, los elementos de inequidad que se derivan del hecho de no haber solicitado una licencia para ausentarse de su cargo como diputado, en el caso particular analizado en supra líneas que es precisamente el hecho de que los mencionados diputados federales obtienen recursos públicos derivados del sueldo que perciben; luego entonces el actor necesitaría haber acreditado en primer término una afirmación categórica que los recursos públicos fueron aplicados a la campaña -y no así a la subsistencia personal del candidato- acreditando además en que forma fueron aplicados dichos recursos públicos y por último la inequidad de dicho proceder; sin embargo en el caso particular, lo cierto es que ni siquiera el recurrente sostiene en su medio de impugnación una afirmación categórica, sino que por el contrario afirma que pudieron haber ocurrido tales hechos, de ahí la imposibilidad de este Tribunal para poder pronunciarse sobre un hecho incierto.

El mismo sentido anterior, ocurre con las demás apreciaciones

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

y conductas donde el recurrente pretende soportar la supuesta inequidad entre los diputados federales que no solicitaron permiso o licencia, para con los demás candidatos participantes, ya que menciona el recurrente que pudieron tener: b) mayor proyección, c) influencia política y beneficios al gobernador, d) acceso a información privilegiada, e) serían inviolables por las opiniones que manifestaran en el desempeño de su encargo, f) continuaron en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que inciden de manera directa en la configuración social de su Estado, al votar iniciativas de ley.

Todos los anteriores, son los argumentos esenciales en donde el recurrente pretende soportar la configuración de una supuesta conducta de inequidad, a partir de considerar que el diputado federal, debido a las anteriores consideraciones enunciadas, se coloca en posición de ventaja por el ejercicio de su cargo frente a los demás contendientes, generando desigualdad de condiciones en la contienda; sin embargo, tales aseveraciones constituyen apreciaciones subjetivas en tanto que no existen elementos que las demuestren; ni mucho menos sustentó objetivamente alguno de los argumentos de conductas de inequidad que expone, con elementos de prueba que permitieran establecer primero que había ocurrido la acción y segundo como es que había aprovechado su investidura para obtener un beneficio irregular o extralegal alguno de los diputados federales y tercero que ése beneficio de inequidad obtenido hubiere sido determinante en el resultado de un proceso democrático; máxime si que como ya se ha señalado, la Constitución Federal, la de la entidad y los diversos ordenamientos legales de la materia, prevén una serie de requisitos que se exigen por igual a todos los contendientes y tienden a evitar la inequidad, desigualdad e imparcialidad en los procesos democráticos, tanto al interior de los partidos como en los constitucionales.

A fin de soportar lo anterior, conviene traer a colación los requisitos que exige la Ley Electoral de San Luis Potosí, para ser

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Diputado local del Estado:

El artículo 292, a la letra dice:

“ARTÍCULO 292. Los partidos políticos, las alianzas partidarias o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, podrán registrar candidatos para cargos de elección popular. Los ciudadanos del Estado podrán ser registrados como candidatos independientes, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

[..]”

De lo previsto en el texto de la Legislación Electoral de antecedentes se desprende que un ciudadano, bien, puede ser registrado como candidato a ocupar un cargo de elección popular, ya sea porque un partido político lo postule o bien, porque ese ciudadano pretenda acceder a un cargo de elección popular de manera independiente. Para el caso particular, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Oscar Bautista Villegas y María Rebeca Terán Guevara, fueron postulados bajo el mecanismo de Alianza Partidaria, para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, dando por cumplido lo que el precitado artículo 292 de Ley Electoral puntualiza.

Ahora bien, de la misma Ley Electoral vigente en el Estado sedesprende que cada candidato debe cumplir diversos presupuestos que establece la Legislación en comento, con la finalidad de obtener el registro de la candidatura sobre el cargo que aspire a contender. Para tal efecto, el artículo 303 de la Ley Electoral invocada, señala:

“ARTÍCULO 303. Cada solicitud de registro será presentada por triplicado y firmada por el presidente estatal del partido solicitante, debiendo contener los siguientes datos:

- I. Cargo para el que se les postula;*
- II. Nombre completo y apellidos de los candidatos;*

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

III. Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales;

IV. Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a diputados por mayoría relativa que busquen reelegirse en sus cargos, deberá especificarse en la solicitud de registro cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese cargo. En el caso de candidatos a diputados por representación proporcional deberá señalarse en la solicitud de registro cuáles integrantes de la lista respectiva están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva. En el caso de candidatos suplentes, se deberá especificar si en los periodos anteriores en que hayan resultado electos, entraron o no en funciones;

V. Para el caso de solicitudes de registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos, deberá especificarse así mismo cuáles de los integrantes, ya sea de la planilla de mayoría relativa o de la lista de representación proporcional, están optando por reelegirse en sus cargos. En el caso de candidatos suplentes, se deberán especificar los periodos en que han resultado electos, y si entraron o no en funciones;

VI. Manifestación por escrito del partido político postulante, de que los candidatos cuyo registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.”

Así mismo se desprende del siguiente artículo 304 de la Ley en comento:

“ARTÍCULO 304. A la solicitud de registro deberá anexarse la siguiente documentación de cada uno de los candidatos:

I. Copia certificada del acta de nacimiento;

II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente;

III. Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por fedatario público;

IV. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito judicial que corresponda;

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:

- a) No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo;*
- b) No ser ministro de culto religioso;*
- c) No estar sujeto a proceso por delito doloso;*
- d) No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro puesto de elección popular;*
- e) No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos;*
- f) No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizado en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal;*
- g) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas;*
- h) De respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Electoral del Estado, y a las autoridades electorales;*
- i) No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato, en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.*

VI. Tratándose de los candidatos a síndicos acreditar contar con el grado de licenciado en Derecho o abogado, en los casos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí;

VII. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación;

VIII. En el caso de candidatos que aspiren a la reelección en sus cargos, se deberá anexar por cada uno de ellos, una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal y la Constitución del Estado en materia de reelección; tratándose de candidatos suplentes, deberán además manifestar si entraron en funciones como propietarios, y

IX. El partido político solicitante deberá anexar así mismo, la copia certificada del acta de asamblea del partido en la que hayan sido elegidos sus candidatos.”

De lo dispuesto del texto de la Ley Electoral del Estado trasunto, se desprende de su literalidad que no existe una mención “expresa” de que un Diputado Federal en funciones deba separarse de éste

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

para acceder a otro cargo de elección popular; razón por la cual este Tribunal Electoral no puede hacer extensivo la finalidad del legislador potosino, que dentro de su esfera de competencia decidió no incluir dentro de los presupuestos de excepción de solicitar licencia, el de Diputado Federal o cualquier otro que explícitamente no lo contemple.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no existe manifestación expresa sobre si un Diputado Federal, deba o no separarse del cargo para postularse por un puesto de elección popular, sin embargo, sí deja ver en su numeral 1:

“El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.”

Y sigue estableciendo esta Ley Orgánica, en su numeral 3:

“El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.”

De lo anterior, se desprende que dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, existe un funcionamiento basado en un Reglamento que regula las disposiciones de actuación para normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, resulta pertinente por tanto, visualizar también el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión², que en su numeral 12 fracción III, dispone:

² A mayor abundamiento véase el artículo 1º del citado Reglamento.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

“1. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:

[...].

III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes.”³

De lo trasunto, es evidente que si bien, dentro del texto Constitucional Federal no existe una mención expresa de licencia para los Diputados Federales por su pretensión de postularse para otro cargo de elección popular; sin embargo, por otro lado si existe una disposición expresa en el Reglamento de la Cámara de Diputados que prevé tal circunstancia como es que al postularse para otro cargo de elección popular, el diputado federal debe solicitar licencia cuando ésta sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes.

Para el caso en particular y en disposición del contenido del artículo 12 fracción III del Reglamento de precedentes, se reitera que en San Luis Potosí, por lo que toca a la normatividad vigente electoral y a la Constitución local, no existe disposición expresa de que un Diputado Federal tenga que separarse de su encargo con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral; por tanto, es imposible que legal y reglamentariamente se imponga esta situación a Esther Angélica Martínez Cárdenas, a Oscar Bautista Villegasy a María Rebeca Terán Guevara, toda vez que se estaría vulnerando el principio de legalidad en perjuicio de los candidatos ya mencionados.

En otro orden de ideas, este Tribunal Electoral estima que en el presente asunto tampoco es posible atender a la diversa manifestación del promovente, misma que es identificada con el agravio 3 de la fijación de la Litis, consideración en la cual expone el

³Énfasis añadido por el Magistrado Ponente.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

recurrente que “la reforma al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio de 2014, transgrede el principio de igualdad tutelado por la Carta Magna, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues con tal reforma no se garantiza la equidad en los procesos de selección de representantes de elección popular”. En ese sentido solicita el recurrente que se incluyan a los diputados federales y demás servidores públicos de la federación en el impedimento contenido en el artículo 47 de la Constitución Política de San Luis Potosí, pues en apreciación del recurrente éste es inconstitucional para las personas que guardan un estatus similar como servidores públicos, por lo que vulnera el principio de igualdad y la medida se torna discriminatoria al brindarles un trato diferenciado a los funcionarios de la federación con respecto a los estatales y municipales; por ende, el actor solicita la inaplicación del artículo 47 de la Constitución de San Luis Potosí.

Al respecto, es viable precisar que este Tribunal Electoral no debe de extender tal requisito negativo con la finalidad de que ello contribuya a dar equidad al derecho de los representantes populares que, a propuesta de sus propios partidos políticos, los designaren candidatos para buscar otro puesto de elección popular.

Lo anterior es así, porque ante el diseño del Constituyente Permanente de los artículos 55 fracciones IV a VII, y 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suponiendo sin conceder que este Tribunal Electoral se acogiera la pretensión del actor, tendría que interpretarse el primero de los dispositivos en el sentido de integrar como requisito negativo el cargo de elección popular de Diputado Estatal sin existir vacío legal al respecto, pues se insiste no ha sido ésta la intención en la construcción del andamiaje jurídico constitucional federal (ni estatal). Por ende, realizar lo anterior este Tribunal Electoral vulneraría los derechos humanos de los candidatos ya multicitados, pues como se precisó en párrafos que

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

antecedentes, nos encontramos ante un supuesto (separación del cargo de diputado federal) que no se encuentra contemplado enunciativamente por la norma prohibitiva, y por ende, atendiendo al rasgo fundamental de los derechos humanos debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos; y por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

Lo expuesto, pone de relieve que lejos de admitirse la aplicación extensiva de la norma como lo pretende el partido recurrente, en el caso concreto, el legislador claramente determinó suprimir la exigencia vinculada con los diputados locales, sin que hasta la legislación vigente se haya retomado tal requisito de elegibilidad.

Por tanto, desde un punto de vista convencional, la Corte Interamericana en su sentencia de seis de agosto de dos mil ocho, relativa al caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, establece en sus párrafos 149 y 162 a 166, que el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido, pues existen numerosas maneras de organizar e implementar sistemas electorales y una riqueza de diferencias basadas en el desarrollo histórico, diversidad cultural y pensamiento político de los Estados; por tanto, la Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos, permitiendo a los Estados miembros que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades, las que incluso pueden variar dentro de su misma sociedad en distintos momentos históricos.

Por lo anterior, si bien existe una obligación de este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 1º y 133 de la Constitución Federal, de aplicar no sólo las legislaciones federales o locales del

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Estado Mexicano, sino también los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por organismos internacionales de los cuales forma parte, a fin de verificar si entre las normas de derecho interno y las supranacionales existe compatibilidad; también lo es, que existe indiscutiblemente un margen de libertad a los Estados miembros de determinar su sistema democrático y electoral, basado en el desarrollo histórico, diversidad cultural y pensamiento político, al ser las autoridades que los integran quienes se encuentran mejor situadas para pronunciarse sobre su contenido, aplicación o la necesidad de restringir un derecho.

En esa línea de pensamiento, el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal señala que el Congreso de la Unión tiene, entre otras facultades la de expedir todas las leyes que sean necesarias, para hacer efectivas las facultades concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión, entre las cuales evidentemente entran las relativas a su conformación e integración, por lo que en todo caso corresponde al Constituyente Federal, o en su defecto al Estatal decidir si incorpora o no algún requisito negativo el cargo de elección popular de Diputados Locales integrantes de la Legislatura del Estado.

Por último, al quedar demostrado plenamente que para contender para diputado estatal no encuadra en las hipótesis de inelegibilidad previstas en ninguna de las normas estudiadas, innecesario resulta en un plano sucesivo, demostrar la necesidad de la separación del cargo con base en alguna temporalidad, pues tal extremo accesoriamente devendría exigible a aquellos funcionarios, que resultaran comprendidos en tales supuestos, lo que en la especie no acontece.

Por lo que respecta al agravio enunciado por el recurrente, identificada en esta sentencia con el numeral **4**, mediante el cual establece que “las Constituciones de otros Estados -por citar algunos- incluyen la obligación de licencia con determinado tiempo a celebrarse

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

la elección a diputados federales y funcionarios de la federación como requisito para ser Diputados Locales”. Al respecto como se puede observar el accionante hacer valer un argumento utilizando en analogía, el uso de Constituciones locales de otras entidades de la República; en tal sentido, es preciso hacer la mención que los argumentos esgrimidos por el ahora recurrente, no se pueden tomar en consideración, por lo siguiente:

1. El Marco Jurídico, en el cual se concentra el aparato jurídico-electoral, en San Luis Potosí y en otros estados de la República, son diversos. En razón de que en esos Estados de la República, el supuesto está contemplado por ley.
2. Al ser el Estado de San Luis Potosí, libre y soberano, tiene para sí, el dictado de sus propias leyes, dando como derivación que dentro del texto de la ley local, no se contemple que un Diputado Federal, para ocupar otro cargo de elección popular, tenga que separarse de su encargo previamente.

De lo anterior se advierte, que resulta evidente que otras constituciones políticas de otras diversas entidades federativas, no pueden tener aplicación en el Estado de San Luis Potosí, dado que el principio general de soberanía de los estados, se delimita para aplicar en un determinado territorio las organización, regulación y reglamentación que previamente es determinada por sus órganos de gobierno, tanto, legislativos los ejecutivo y judicial. Luego entonces el hecho de que no contemple una figura jurídica la constitución del estado, tal situación no implica un descuido sino una real intención del legislador local para que la organización de las elecciones se realizara de determinada forma. Al respecto incluso es pertinente aclarar que respecto a esa Ley Electoral vigente, el partido tuvo suficiente los términos de ley para haberse inconformado con ella al momento de su expedición y/o su promulgación, sin embargo no lo hizo, por lo que resulta evidente que la aceptó en sus términos.

Por otro lado, no escapa para este Órgano Jurisdiccional que el

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

recurrente, hace valer criterios de Acción de Inconstitucionalidad número 32/2011, e inclusive un Juicio de Revisión Constitucional, bajo el número SM-JRC-24/2012, donde hace valer ciertos criterios que deben de ponderarse; sin embargo, para el caso en particular, este Tribunal, considera que los argumentos esgrimidos por el ahora promovente, no se pueden tomar en consideración, por lo siguiente:

1. La Acción de Inconstitucional que se plantea, va orientada bajo un supuesto diverso al que ahora se acciona, es decir, sobre los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento.⁴
2. El Juicio de Revisión Constitucional SM-JRC-24/2012, va orientado sobre un supuesto diverso al que ahora se acciona, es decir, sobre el requisito de separación de cargo de ciento veinte días antes de la elección para acceder a ser miembro del Ayuntamiento.⁵

En tal sentido, no es viable en el presente asunto actualizar el supuesto normativo que nos ocupa, con los de un funcionario público electo por representación popular que contendió como candidato a miembro del Ayuntamiento, que cita el recurrente; pues se reitera, el diseño del Constituyente Permanente de los artículos 55, fracciones IV a VII, y 59 de la Constitución Federal, así como la ausencia en tal aspecto en la Constitución local y la Ley Electoral vigente en el Estado, no permite darse a las hipótesis restrictivas (o ausencias) un alcance tal, que implique considerar como requisitos negativos de elegibilidad supuestos que no se encuentren contemplados por la norma.

Por último, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que en diversas resoluciones relevantes⁶ emitidas por la Sala Regional

⁴Véase: La Acción de Inconstitucionalidad planteada por el recurrente dentro de su curso.

⁵ Véase: El Juicio de Revisión Constitucional planteado por el recurrente dentro de su curso.

⁶ Entre otras resoluciones se citan como casos relevantes las siguientes: SM-JRC-25-2012 y SM-JRC-24/2012

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con circunscripción en Monterrey, N.L., en el proceso electoral 2012 de San Luis Potosí, dicha sala adoptó el criterio de declarar inelegibles como candidatos a aquellos funcionarios que no se habían separado de su encargo, por lo menos 90 días antes de la elección a un puesto de elección popular, estableciendo la referida Sala Regional que sólo así se propiciaría una participación equilibrada entre contendientes, atendiendo a que de permitírseles participar en comicios municipales, sin separarse de su encargo legislativo, los colocaría en una situación de ventaja respecto al resto de sus competidores, por las funciones que desempeñan como integrantes del Poder Legislativo. Sin embargo respecto de tal criterio, debe recordarse en primer término que los artículos 47 fracción II y 118 fracción II, ambos de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, fueron reformados en la fecha del 26 de junio de 2014, artículos que en lo que aquí interesaba, restringían para ser diputado o miembro de un ayuntamiento a: los “Funcionarios de nombramiento estatal o municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad”.

Por otra parte, en contraargumento al criterio de inelegibilidad de funcionarios asumido por la Sala Monterrey en la elección 2012, cabe señalar que en recientes criterios,⁷ establecidos en resoluciones dictadas, tanto por la Sala Superior como por la Sala Regional Monterrey ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han establecido directrices que resuelven privilegiar el derecho del ciudadano a ser votado, frente a otro posible derecho político-electoral en controversia, sobre todo cuando la conducta de inelegibilidad no está prevista categóricamente en la norma fundamental, como es el caso que nos ocupa, por lo que el limitante de solicitar licencia en el cargo de representación popular que se ejerce para ser candidato para un diverso puesto, no debe sobrepasar

⁷SUP-JDC-534-2015 y SM-JDC-272/2015.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

esas limitantes que fija la Ley Fundamental.

Por ultimo también se considera importante citar, que algunas veces los derechos políticos-electorales de los ciudadanos se pueden ver enfrentados, hasta el hecho de pretender los involucrados que un derecho extinga al otro, cuando lo cierto es que ambos derechos merecen una tutela efectiva, sin embargo cuando existe un derecho frente a otro, se termina por privilegiar a aquel derecho que se considera de mayor trascendencia ante el derecho humano que regula. En ése sentido frente al derecho del principio de equidad que rige los procesos electorales, en los términos que pretende el actor, se encuentra la protección del derecho a ser votado, el cual debe privilegiarse en los términos que establece el artículo 1º Constitucional, de modo que no pueden exigirse mayores limitaciones a ese derecho de las previstas en la propia Norma Fundamental, sobre todo que ante el hecho de que en el presente asunto el actor no demostró objetivamente las acciones concretas de inequidad que se originaran, pues si bien mencionó ciertas conductas clasificadas de la a) a la f) progresivamente, que pudieran dar lugar a una inequidad, lo cierto es que en ninguna de ellas aportó los elementos objetivos que demostraran la configuración de alguna de éstas conductas de manera particular, por lo tanto se insiste en privilegiar el derecho a ser votado en favor de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de Oscar Bautista Villegas y María Rebeca Terán Guevara, en los mismos términos que fueron puntualizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente No. SUP-JDC-0534-2015, sentencia en la cual, puntualiza la referida Sala Superior que si la norma interna que regula las exigencias para ser diputado federal y las condiciones para contender por ese cargo en el procedimiento interno respectivo, no establece el requisito de referencia, es decir, que los diputados locales se separen de cargo para registrarse como precandidato a diputado federal, esa normatividad es acorde a la Constitución Federal y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula el ejercicio

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

del derecho político-electoral a ser votado. Criterio anterior que es coincidente con el presente caso en estudio.

Por otro lado, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3º fracciones XIII, XIV y XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 23 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se comunica a las partes el derecho que les asiste para manifestar, dentro del término de 3 tres días, su conformidad o inconformidad en que sus datos personales señalados en el artículo 3º fracción XI de la Ley en cita, se incluyan en la publicación, en el sentido de que la falta de oposición expresa hará presumir su consentimiento en ello; lo anterior, sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor.

Por último, por cuanto hace a la notificación que por medio de oficio debe hacerse a las Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV, para tal efecto, con fundamento en los artículos 14 fracción XIV y 22 fracciones XVI primera parte y XVII de la Ley de Justicia Electoral, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para que por su conducto sin demora alguna, haga llegar el oficio de la notificación de la presente resolución, a las Comisiones Distritales Electorales locales III, X y XIV; y a su vez, haga llegar a este Órgano Jurisdiccional la constancia en donde obre el citado cumplimiento.

En vista de las consideraciones que anteceden, y toda vez que en el presente asunto resultaron infundados los agravios planteados por la parte actora, se confirman los dictámenes de fecha 27 de marzo de 2015, emitidos por la Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV, en favor de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de Oscar Bautista Villegas y María Rebeca Terán Guevara.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 5°, 12 fracción I, 56, 57, 58, 59, 68 y 69 de la Ley de Justicia Electoral, se resuelve:

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. Los argumentos de inconformidad planteados por el promovente resultan infundados; en consecuencia:

TERCERO. Se confirman los dictámenes de fecha 27 de marzo de 2015, emitidos por la Comisiones Distritales Electorales III, X y XIV, mediante los que aprueban respectivamente los registros de candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa de Esther Angélica Martínez Cárdenas, de Oscar Bautista Villegas y María Rebeca Terán Guevara.

CUARTO. Por cuanto hace a los planteamientos formulados por los terceros interesados; dígaseles que estén a lo dispuesto en la parte considerativa octava de la presente resolución.

QUINTO. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3° fracciones XIII, XIV y XV, 41 fracción IV, en correlación con el diverso 23 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; lo anterior en los términos precisados en la última parte del considerando octavo de la presente resolución.

SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes y a los terceros interesados; y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSO DE REVISIÓN
TESLP/RR/20/2015

Participación Ciudadana y por conducto de éste, a la Comisión Distrital Electoral III en Santa María del Rio, S.L.P., Comisión Distrital Electoral X en Rioverde, S.L.P., y a la Comisión Distrital Electoral XIV de Tancanhuitz, S.L.P., en los términos precisados en la parte considerativa octava de la presente resolución. Comuníquese y cúmplase.

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Señores Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, **Licenciado Rigoberto Garza de Lira, Licenciada Yolanda Pedroza Reyes y Licenciado Oskar Kalixto Sánchez**, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes actúan con Secretario General de Acuerdos que autoriza, Licenciado Joel Valentín Jiménez Almanza, y Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada María Concepción Castro Martínez. Doy Fe. **Rúbricas.**